SEÑORA JUEZA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. DRA. KARLA ANDRADE QUEVEDA (JUEZA SUSTANCIADORA)

LENÍN ZEBALLOS MARTÍNEZ, MARIANELA PINARGOTE VALENCIA y MAURICIO SUÁREZ MARTÍNEZ, por nuestros propios derechos, en calidad de jueces titulares de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del proceso constitucional de acción extraordinaria de protección signada en el despacho a su cargo con el **N.º 3185-21-EP**, ante usted respetuosamente comparecemos para manifestar lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES

Mediante auto de mayoría expedido el 21 de enero de 2022, notificado el 4 de febrero del mismo año, el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional conformado por los jueces constitucionales, Karla Andrade Quevedo, Ramiro Ávila Santamaría y Enrique Herrería Bonnet, resolvieron admitir a trámite la demanda de acción extraordinaria de protección presentada por el señor Leyton Andrés Marín Vergara, sin que esta situación jurídica constituya pronunciamiento sobre la materialidad de la pretensión.

De conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional se dispuso la presentación de un informe de descargo dentro del término de diez días contados a partir de la notificación del prenombrado auto de admisión; de tal manera que, al ser los jueces provincial que emitidos la sentencia contra la cual se presentó acción extraordinaria de protección comparecemos a presentar el respectivo informe de descargo con base en las siguientes alegaciones jurídicas:

II.- LA SENTENCIA EXPEDIDA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DENTRO DEL PROCESO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO VULNERÓ LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES ALEGADOS COMO INFRINGIDOS POR EL ACCIONANTE

El accionante alegó en el texto de demanda de acción extraordinaria de protección que la decisión judicial impugnada vulneró los derechos

constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso en la garantía de la motivación, contenidos en los artículos 82 y 76 numeral 7 literal 1 del texto constitucional, respectivamente. Antes de elaborar el análisis constitucional que corresponde en el presente informe jurídico, resultar preciso indicar que los argumentos jurídicos se centrarán en constatar que nuestra actuación jurisdiccional, en calidad de jueces constitucionales de segunda instancia, no infringió la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con el diseño normativo y la naturaleza jurídica de la acción de protección. En tal virtud, procedemos a formular los siguientes problemas jurídicos:

A. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los contratos de servicios ocasionales en nuestro ordenamiento jurídico?

Los contratos de servicios ocasionales son aquellos que se crean debido a una necesidad institucional no permanente a través de una partida presupuestaria y de la disponibilidad de recursos económicos¹. Con la finalidad de comprobar que la modalidad contractual del accionante no generó en su favor una situación jurídica de estabilidad laboral, resulta importante citar a continuación el artículo 228 de la Constitución de la República que establece: *“El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora”*.

Por su parte, el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público expone en su parte pertinente respecto a los contratos de servicios ocasionales que: *“Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no ingresarán a la carrera del servicio público, mientras dure su contrato. Nada impedirá a una persona con un contrato ocasional presentarse a un concurso público de méritos y oposición mientras dure su contrato (...) Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo*

¹ LOSEP, artículo 58.

darse por terminado en cualquier momento por alguna de las causales establecidas en la presente ley y su reglamento (...)”.

En este contexto, la Corte Constitucional, en calidad de máximo órgano de control e interpretación constitucional, desde temprana jurisprudencia en la **sentencia N.º 005-13-SIS-CC, dentro del caso N.º 0043-12-IS**, determinó que:

“... para el ingreso al sector público en forma permanente, se debe previamente haber ganado el concurso de oposición y mérito y no de otra forma. Por tanto, constitucional y legalmente, no se puede extender el nombramiento, cuando la situación jurídica de la servidora está supeditada a la figura jurídica de “ocasional”, ni su constante renovación le otorga estabilidad en el sector público”.

De ahí que, por citar un supuesto reiterado, el máximo órgano de justicia constitucional en reiteradas sentencias resolvió declarar la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica, luego que mediante sentencias constitucionales se ordenó la expedición de nombramientos sin que se hubiere efectuado el respectivo concurso de méritos y oposición. Al respecto, en la **sentencia N.º 014-SIS-CC, dentro del caso N.º 0022-10-IS**, se expresó:

“(...) En base a dichas consideraciones, mal podría una decisión judicial ordenar que se expida un nombramiento, cuando acorde a lo establecido por las disposiciones transcritas, para tal efecto debe mediar el respectivo concurso de méritos y oposición. Tal como sucede actualmente, donde de igual forma el ordenamiento constitucional y legal vigente establecen los concursos de méritos y oposición como el mecanismo para ingresar al sector público (...)

Además, la **sentencia N.º 116-16-SEP-CC, dentro del caso N.º 0555-12-EP**, determinó que:

... la emisión continua o sucesiva de los contratos de servicios ocasionales ni su constante renovación, le otorga a una persona la estabilidad laboral en el sector público y que el disponer la emisión de un nombramiento definitivo para el ingreso al servicio público

mediante sentencia, sin que se haya realizado un concurso de oposición y merecimientos, es contrario a la Constitución de la República.

Dichos precedentes judiciales fueron posteriormente ratificados por la nueva conformación de la Corte Constitucional en la **sentencia N.º 108-14-EP/20 de 09 de junio de 2020**, que ratificó textualmente lo siguiente:

“**74.** En virtud de las disposiciones de la LOSEP que establecían expresamente que los contratos de servicios ocasionales no podían generar estabilidad laboral, se generó un segundo momento en la jurisprudencia de la Corte al respecto. En este sentido, se concluyó que no se podía generar estabilidad laboral a las y los servidores contratados mediante este régimen, con base en la sola emisión sucesiva de estos contratos más allá del límite de tiempo permitido por la ley, dada la propia naturaleza de este tipo de contratos. Así, por ejemplo, en la sentencia 033-13-SEP-CC de 17 de julio de 2013, la Corte estableció que los contratos de servicios ocasionales, (...) de ninguna manera generan estabilidad ya que tienen un tiempo de duración determinada, puesto que su finalidad es suplir ciertos vacíos de personal”.

En función de la normativa constitucional y legal, así como de la jurisprudencia constitucional antes expuesta, **es evidente que no se puede otorgar estabilidad laboral a los servidores públicos que forman parte del régimen de contratos de servicios ocasionales sobre la base de la emisión sucesiva de contratos ocasionales más allá del límite de tiempo permitido**, puesto que el acceso a la carrera administrativa, por mandato constitucional, únicamente se puede dar en razón de un concurso de méritos y oposición a partir del cual se lo declare como ganador conforme lo reitera el precedente constitucional contenido en la **sentencia N.º 23-11-IS/19 de 11 de diciembre de 2019**.

Incluso, a la fecha de separación del accionante, los precedentes judiciales de la Corte Constitucional señalaban que en virtud de la naturaleza jurídica del contrato de servicios ocasionales, los mismos no generan estabilidad en la relación laboral, dado que, la única forma de obtener estabilidad permanente en el sector público, es ser declarado ganador de un concurso de méritos y

oposición, en concordancia con lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que me permito citar a continuación:

Art. 58.- De los contratos de servicios ocasionales.- “La suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada de forma excepcional por la autoridad nominadora, **para satisfacer necesidades institucionales no permanentes, previo el informe motivado de la Unidad de Administración del Talento Humano,** siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este fin (...)

Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no ingresarán a la carrera del servicio público, mientras dure su contrato. Nada impedirá a una persona con un contrato ocasional presentarse a un concurso público de méritos y oposición mientras dure su contrato (...)

Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento por alguna de las causales establecidas en la presente ley y su reglamento (...)”

(El énfasis es nuestro)

En consecuencia, el otorgamiento de un nombramiento por parte de la institución municipal se encontraba sujeto inexorablemente a la celebración y culminación de un concurso de méritos y oposición, bajo los parámetros legales y constitucionales, sin que se pueda prescindir del respectivo procedimiento para la expedición de un nombramiento, en tanto que al estar dentro de la esfera del derecho público, solamente se puede actuar conforme a lo que la ley permite y obliga. Una actuación contraria a lo dispuesto por las normas constitucionales y legales antes referidas, implica la realización de actos arbitrarios al interpretar discrecionalmente las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico, por tanto, se concluye que la emisión de

contratos de servicios ocasionales no generó estabilidad laboral al accionante, ni tampoco se vulneraron sus derechos constitucionales.

B. ¿Los contratos de servicios ocasionales suscritos entre una persona con discapacidad y una entidad del sector público se pueden dar por terminado?

Una vez establecido que este órgano judicial ejerció jurisdicción constitucional con respeto al ordenamiento jurídico vigente, previo a responder el presente problema jurídico planteado nos corresponde como operadores de justicia, en ejercicio de nuestro derecho al debido proceso en la garantía de la defensa, contestar los argumentos jurídicos consignados por el accionante en la acción extraordinaria de protección, específicamente en lo relacionado a si supuestamente incumplimos la regla de precedente contenida en la **sentencia N.º 048-17-SEP-CC, dentro del caso N.º 0238-13-EP.**

De un análisis integral a la sentencia constitucional que el accionante considera “incumplida”, ustedes pueden observar que no existe similitud de hechos entre el presente caso planteado por el señor Leyton Andrés Marín Vergara con el caso planteado por la señora Ximena del Carmen Gilces Cedeño. La problemática jurídica del caso cuya regla de precedente se considera que es aplicable a la presente acción extraordinaria de protección tiene como hecho principal que esta accionante en su demanda de acción de protección señaló que el 8 de junio de 2012, mediante oficio N.º 00420, el ingeniero Tito Quimba Torres le notificó con la terminación de la relación laboral que mantenía con la Corporación Nacional de Electricidad, regional Manabí. Señaló, además, que laboró para la referida institución durante 4 años, inicialmente en calidad de trabajadora tercerizada y que fue separada de su cargo sin considerar que es una persona con discapacidad y que entonces se encontraba en el sexto mes de su permiso para el cuidado del recién nacido, previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) - artículo 33-. Por tales razones, la legitimada activa consideró que el acto administrativo vulneró derechos constitucionales.

En razón de lo expuesto, la sentencia constitucional no contiene identidad de hechos con el presente caso, **por lo que la regla de precedente no es**

aplicable al caso concreto porque el accionante, primero: no se encontraba en doble condición de vulnerabilidad; y, segundo: no estaba en periodo de lactancia, esta última situación origina la aplicación de un marco constitucional y jurisprudencial totalmente distinto al de una persona con discapacidad que mantiene vigente con la institución pública un contrato de servicios ocasionales.

Para reafirmar lo anterior, en el caso de la protección constitucional relacionado con la condición de mujer en periodo de lactancia, este máximo órgano de justicia constitucional expidió varios pronunciamientos en los cuales reafirmó las obligaciones o medidas reforzadas de protección de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en el ámbito laboral a pesar de la modalidad de contratos de servicios ocasionales. Por citar el caso relacionado con la **sentencia N.º 3-19-JP/20 y acumulados de 5 de agosto de 2020**, se dispuso con carácter erga omnes incluso:

“1. Disponer que la Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos con iniciativa legislativa, presente en un plazo de seis meses, a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de ley, para incorporar el derecho al cuidado en el ámbito laboral y para que se adecúe el sistema jurídico a los parámetros de esta sentencia y de los estándares internacionales que regulan la materia.

2. La Asamblea Nacional deberá legislar, en el plazo de un año contados a partir de la entrega del proyecto de ley, sobre el derecho al cuidado, la terminación del derecho al cuidado hasta que concluya el periodo de lactancia; ampliar el periodo de lactancia y período de cuidado; ampliar y regular el permiso de los hombres para el cuidado; regular el derecho al cuidado de madres adoptivas, y ampliar el periodo de cuidado de licencia, sin perjuicio de que, transcurrido este plazo, la Corte Constitucional aplique lo dispuesto en la ley para el control constitucional de las omisiones normativas, y declare la inconstitucionalidad por omisión (...).

En conclusión, existe una diferencia sustancial entre el caso sujeto a análisis por parte del accionante con el presente proceso constitucional N.º 3185-21-EP, en la medida que no existen las mismas propiedades relevantes que obliguen a que este máximo órgano de justicia constitucional pueda considerar el precedente judicial contenido en la sentencia N.º 048-17-SEP-CC, dentro del caso N.º 0238-13-EP. Si se considerara como regla de precedente lo alegado por el accionante se desconocería el ámbito de protección que presentan las diferentes situaciones jurídicas que son conocidas y resueltas por la justicia constitucional.

Ahora bien, en cumplimiento al problema jurídico planteado, con la finalidad constatar que los contratos de servicios ocasionales suscritos entre una persona con discapacidad y una entidad del sector público se pueden terminar sin menoscabar derechos constitucionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la **sentencia N.º 689-19-EP/20 de 22 de julio de 2020**, establece que las entidades públicas están facultadas para dar por terminada la **relación de manera unilateral, cuando existan razones previamente establecidas en la ley y el reglamento pertinente, que así lo justifique.**

Sobre este escenario jurídico, los contratos de servicios ocasionales suscritos entre una persona con discapacidad y una institución pública, únicamente, se podrán terminar en virtud de las siguientes causales:

- a) Cumplimiento del plazo mutuo;
- b) Mutuo acuerdo de las partes;
- c) Renuncia voluntaria presentada;
- d) Incapacidad absoluta y permanente de la o el contratado para prestar servicios;
- e) Pérdida de los derechos de la ciudadanía declarada judicialmente en providencia ejecutoriada;
- f) Por obtener una calificación regular o insuficiente establecida mediante el proceso de evaluación de desempeño;
- g) Destitución; e,
- h) Muerte

En el presente caso, se observa que la institución pública accionada en la acción de protección, luego de la suscripción sucesiva de varios contratos de servicios ocasionales con el accionante, procedió a dar por terminado este vínculo contractual en estricta observancia a la normativa legal vigente y a la jurisprudencia constitucional que consagra el cumplimiento del plazo mutuo como una forma de terminación legal de este tipo de contratos que sirven para cubrir una necesidad institucional no permanente.

Por consiguiente, la actuación jurisdiccional de los comparecientes no vulneró los derechos constitucionales del accionante porque a pesar de conocer que esta parte procesal era una persona con discapacidad, la jurisprudencia constitucional citada consagra que la suscripción sucesiva de contratos de servicios ocasionales no genera ningún tipo de estabilidad laboral, frente a lo cual, en calidad de jueces de garantías jurisdiccionales, mal haríamos en declarar la vulneración de derechos constitucionales si incluso el precedente judicial contenido en la **sentencia N.º 689-19-EP/20 de 22 de julio de 2020**, establece que las entidades públicas sí están facultadas para dar por terminada la relación de manera unilateral, tal como ocurrió en el caso *sub examine*.

C. El principio del stare decisis obliga a todos los operadores de justicia a considerar los precedentes judiciales de la Corte Constitucional aplicables al caso concreto

El valor de los precedentes judiciales emanados por la Corte Constitucional es de vital importancia para la Constitución de la República en la medida que las decisiones son vinculantes², lo cual implica que los jueces y las juezas tienen el deber de adherirse a lo decidido en anteriores pronunciamientos por comprender las nociones de justicia, paz, igualdad y legitimidad. En cuanto a los elementos materiales se le atribuyen a este principio las siguientes características:

1. Otorgar certeza y uniformidad jurisprudencial unificando la interpretación constitucional;
2. Garantizar el derecho constitucional a la seguridad jurídica;

² Constitución de la República, artículo 436 numerales 1 y 6.

3. Permitir la previsibilidad del derecho;
4. Controlar la arbitrariedad en la administración de justicia constitucional; y,
5. Garantizar el derecho a la igualdad formal entre los justiciables, entre otros.

En efecto, la Corte Constitucional, en calidad de máximo órgano de administración de justicia constitucional, en la **sentencia N.º 139-15-SEP-CC, dentro del caso N.º 1096-12-EP**, respecto al principio del stare decisis estableció desde temprana jurisprudencia lo siguiente:

“(…) Constituye un elemento conductor para la decisión del venidero caso análogo, pues, las decisiones anteriormente adoptadas por la misma Corte Constitucional, como regla, obliga a respetar sus propios precedentes para mantener la coherencia en las argumentaciones y soluciones enunciadas en aras de la uniformidad”.

De allí, cuando se presenta en la judicatura constitucional una demanda o acción por parte de cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, **y si ese caso tiene como precedente una sentencia en la cual ya se reconoció o negó el derecho reclamado, habría instalado condiciones de predictibilidad, por lo que el ulterior caso necesariamente debe guardar armonía o de lo contrario, constituiría una verdadera herejía jurídica, pues habría garantizado la vigencia de los derechos constitucionales para uno y para los otros no.** Este principio, involucra las nociones de justicia, paz, igualdad y legitimidad. En consecuencia, por añadidura, la sentencia ulterior sigue su efecto a la sentencia anterior, en aplicación del principio stare decisis, que prima facie es aceptar lo resuelto en el pasado y no alterar lo decidido. En resumen, el stare decisis obliga a la Corte, mantener los razonamientos (rationes decidendis) de las decisiones concretas tomadas anteriormente”.

(El énfasis es propio)

Asimismo, el máximo intérprete constitucional en la **sentencia N.º 109-11-IS/20 de 26 de agosto de 2020**, estipula que la “obligatoriedad” de sus precedentes judiciales se funda en: **(i) Derecho a la igualdad formal**: tratar igual a casos con iguales propiedades relevantes; y, **(ii) Derecho a la seguridad jurídica**: dotar a las expectativas de la persona de una previsibilidad razonable, tal y como lo transcribo textualmente a continuación:

“21. Los precedentes judiciales emanados de las decisiones de la Corte Constitucional son vinculantes, de conformidad con la Constitución (art. 436 núm. 1 y 6) y la LOGJCC (art. 2 núm. 3). Dicha obligatoriedad se proyecta, horizontalmente, respecto de la propia Corte, y verticalmente, respecto de todas las demás autoridades jurisdiccionales. Las indicadas disposiciones normativas -que dotan de vinculatoriedad a los precedentes emanados de las decisiones de esta Corte- se fundan, a su vez, en **el derecho constitucional a la igualdad formal (art. 66 núm. 4), que demanda tratar igual a casos con iguales propiedades relevantes, y en el derecho a la seguridad jurídica (art. 82), que exige dotar a las expectativas de las personas de una previsibilidad razonable respecto de las decisiones judiciales.**’

23. Dicho precedente judicial en sentido estricto está conectado íntimamente con la *motivación* de las decisiones judiciales. Según la Constitución (artículo 76 núm. 7 letra l), toda decisión judicial debe tener una motivación; dentro de esta, sin embargo, cabe distinguir la *ratio decidendi*, o sea, el conjunto de razones que son *esenciales* para la justificación de lo decidido (las demás consideraciones contenidas en la motivación suelen denominarse *obiter dicta*). Y, **dentro de la *ratio decidendi*, cabe todavía identificar su núcleo, es decir, la regla en la que el decisor subsume los hechos del caso concreto para, inmediatamente, extraer la decisión** (lo que queda fuera de dicho núcleo son las razones que fundamentan la mencionada regla)”.

(El énfasis es nuestro)

De manera que se considera que los precedentes judiciales están conectados íntimamente con la motivación de las decisiones judiciales, siendo necesario que la Corte Constitucional trate de idéntica manera a los casos con iguales propiedades y elementos relevantes para garantizar los derechos a la igualdad formal y a la seguridad jurídica.

Finalmente, en virtud del derecho a la seguridad jurídica, los sujetos procesales envueltos en una controversia tienen la garantía de que las autoridades jurisdiccionales, deben resolver el caso en concreto en atención a la normativa constitucional e infraconstitucional establecida con anterioridad y que resulta pertinente e idónea para la situación jurídica que les compete resolver, so pena de incurrir en una decisión arbitraria e inconstitucional. Por lo tanto, el derecho a la seguridad jurídica solo se garantiza, a partir de la aplicación obligatoria de las normas constitucionales y legales que regulan los supuestos fácticos de cada caso en particular, sin que sea posible que los juzgadores, a partir de apreciaciones o razonamientos de carácter subjetivo, se aparten de lo ordenado expresamente por la Constitución, ley y jurisprudencia pertinente.

Como se pudo observar, a partir de lo estipulado en el artículo 228 de la Constitución de la República, artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público, y jurisprudencia aplicable al presente caso, el hecho de otorgar estabilidad laboral a una personas con discapacidad sin que previamente hubiere ganado un concurso de méritos y oposición, constituye un trato diferenciado no justificado que, según nuestro criterio jurídico, podría inobservar la Constitución de la República, ley y jurisprudencia, **puesto que crearíamos una excepción ilegítima a la regla general, que es aplicable para todas las personas que desean acceder al servicio público con estabilidad y permanencia**, en tanto que es indispensable el respeto del derecho a la igualdad en el ingreso al servicio público en condiciones de permanencia y estabilidad, sin perjuicio de considerar que se hace necesario que la Corte Constitucional, en calidad de máximo órgano de justicia constitucional, avance en el desarrollo progresivo de los derechos laborales de este grupo de atención prioritaria.

III.- LOS JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS DE REALIZAR UNA VALORACIÓN O APRECIACIÓN DE LA PRUEBA REALIZADA DENTRO DE UN PROCESO DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES

Una vez comprobado que no existió vulneración de los derechos constitucionales alegados por el accionante, es pertinente recordar que mediante la presente acción extraordinaria de protección no se puede analizar la apreciación de la prueba realizada dentro del proceso constitucional de acción de protección, pues no cabe que este máximo órgano de justicia constitucional actúe como una instancia adicional, como lo pretende el accionante en virtud de los argumentos jurídicos planteados en la demanda constitucional objeto de la presente controversia.

En efecto, la Corte Constitucional en la **sentencia N.º 2097-16-EP/21**, textualmente señaló:

32. “(...) Por lo tanto, se observa que la pretensión del accionante se dirige a que este Órgano revise si la apreciación de la prueba realizada es la que corresponde y analice si la decisión impugnada es o no la correcta, análisis que no es competencia de esta Corte pues no cabe que, en el examen de una acción extraordinaria de protección, este Organismo actúe como una instancia adicional”.

En similar sentido, la **sentencia N.º 1186-15-EP/20**, indicó:

32. “Al resolver una acción extraordinaria de protección y, en particular el cargo de la motivación, este organismo no está facultado para pronunciarse en torno a la apreciación probatoria que realizan los jueces constitucionales de instancia. Más bien, para determinar una vulneración de la garantía de la motivación, la Corte debe verificar si la sentencia impugnada cumple con la enunciación de normas, la explicación de la pertinencia de la aplicación de las mismas, y el análisis para verificar la existencia o no de vulneración de derechos constitucionales, conforme ha sostenido esta Magistratura”.

IV.- NOTIFICACIONES

Las notificaciones que legalmente nos corresponden las recibiremos en los siguientes correos electrónicos:

- lenin.zeballos@funcionjudicial.gob.ec
- marianela.pinargote@funcionjudicial.gob.ec
- mauricio.suarez@funcionjudicial.gob.ec

Sírvase en mérito de sus potestades resolver conforme a derecho.-